CUARTO CONCEJAL DEL PP ASESINADO

La Ertzaintza se negó en diciembre a poner escolta a los concejales «populares»

Durante una reunión con Interior y el PP

FERNANDO GAREA
FERNANDO LAZARO

MADRID.— La Consejería de Interior del Gobierno Vasco volvió a rechazar el pasado mes de diciembre, días después del asesinato de del concejal del PP José Luis Caso, que la Ertzaintza se encargara de la protección de los concejales del Partido Popular del País Vasco.

Tras este asesinato, que fue precedido de un atentado frustrado contra la también concejal *popular* Elena Azpiroz, hubo una reunión en la que participaron representantes del Ministerio de Interior, de la Ertzaintza y del Partido Popular vasco. El Gobierno vasco reiteró entonces la imposibilidad material de proteger a los 160 concejales del PP, además de que, en su opinión, podría haber un agravio comparativo respecto a otras personas que también figuran entre los objetivos de ETA.

La Ertzaintza es una policía integral y, por tanto, tiene competencia absoluta sobre la protección de los políticos en el País Vasco. La Policía Nacional sólo se encarga de la protección de parlamentarios de la comunidad autónoma en el Congreso de los Diputados. Los agentes autonómicos vascos dan protección a los consejeros del Gobierno vasco y a los líderes de los partidos de la comunidad autónoma; en ningún caso a otros responsables de las formaciones políticas con representación en el Parlamento vasco.

Tras la reunión del mes de diciembre, el PP vasco amplió el plan de protección privada que ya puso en marcha tras el secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco, el pasado mes de julio.

Para ello, el PP llegó a un acuerdo con cuatro empresas de seguridad para intentar proteger a los concejales del partido en el Páis Vasco. Estas empresas hicieron una oferta especial al PP vasco que, no obstante, ha tenido que pedir dinero a la sede central del partido para sufragar estos gastos.

Las cuatro empresas de seguridad reclutaron varios centenares de agentes de seguridad de fuera del País Vasco. Los guardias son todos voluntarios y cobran unas 3.400 pesetas diarias, más un plus especial de peligrosidad.

ALERTA PERMANENTE.— Todos ellos residen en hostales y cada concejal tiene un guardia asignado permanentemente. Además, hay retenes de agentes en alerta permanente.

Las empresas privadas de seguridad impartieron unos cursillos sobre medidas de autoprotección.

No es ésta la primera ocasión en que los dirigentes del PP mantienen una dura discrepancia con el Gobierno vasco por las actuaciones de la Ertzaintza. De hecho, cuando ETA asesinó a Gregorio Ordóñez, el ahora ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, mantuvo una dura polemica al denunciar el hecho de que la policía vasca no escoltó a Ordóñez.

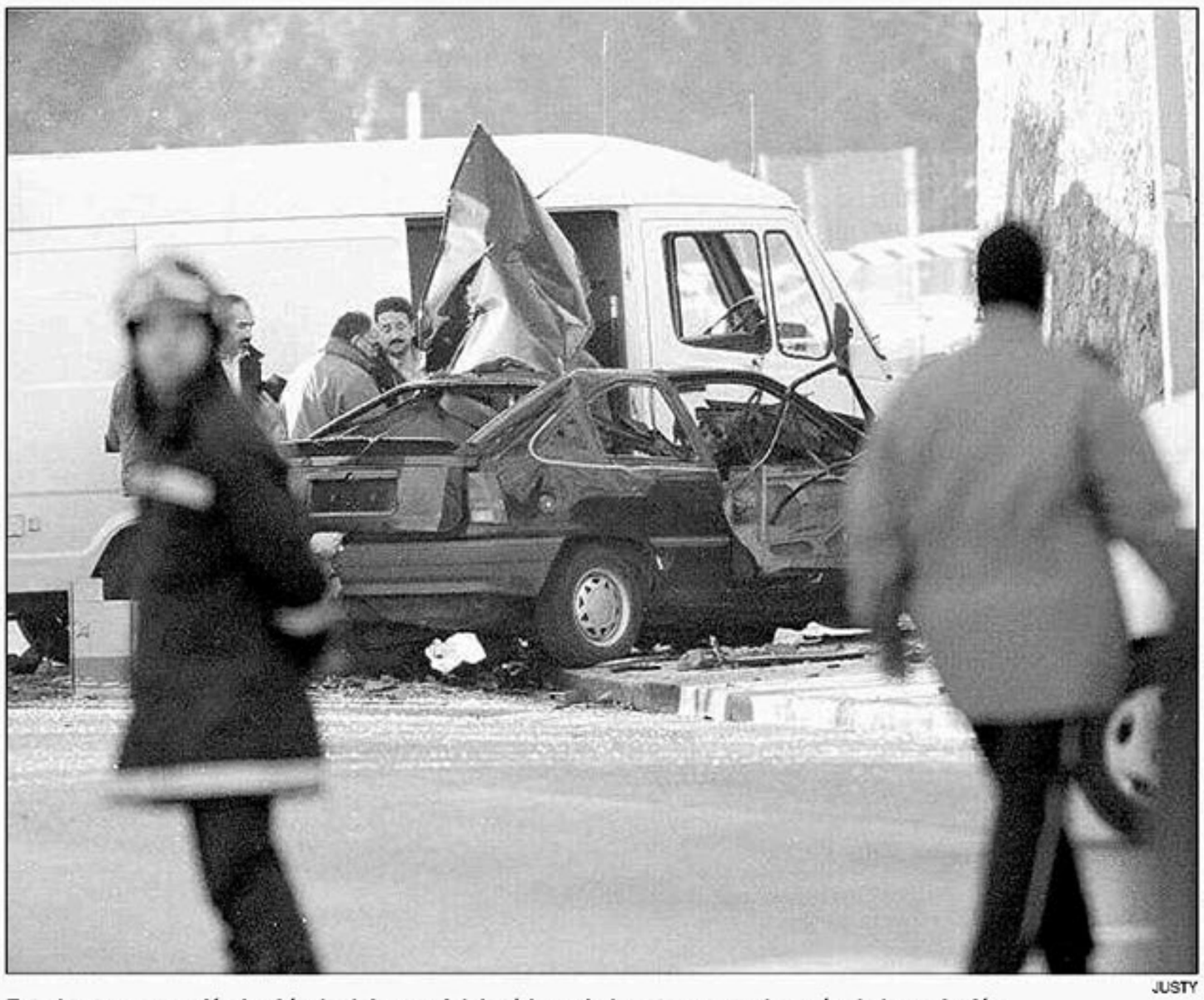
El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, y el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxa, reiteraron ayer la necesidad de medidas de protección más eficaces para todos los concejales populares.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, señaló ayer que los únicos culpables del atentado contra el concejal del PP José Ignacio Iruretagoyena «son ETA y su entorno», aunque dijo que «hay una responsabilidad de seguridad ciudadana por parte de la Ertzaintza».

«Los culpables son las alimañas de ETA y quienes les apoyan, pero también es cierto que hay unas responsabilidades por parte de todos y aquí hay una responsabilidad de seguridad ciudadana por parte de la Ertzaintza, que es la que la ejerce y la que tiene que proteger a toda esta gente del PP o de cualquier otro partido que esté amenazada», destacó.

El delegado del Gobierno en Euskadi afirmó, no obstante, que «no puede darse seguridad en valor absoluto, pues cuando alguien quiere matar a otro, normalmente, acaba llevándose el gato al agua, pero hay que poner todos los medios».

Los sindicatos policiales manifestaron que la eficacia policial debe ser el elemento fundamental en la lucha contra el terrorismo, por lo que reclaman una mayor dotación de medios para la Policía Nacional y una mayor coordinación entre las distintas fuerzas de Seguridad del Estado.



JUSTY

Estado en que quedó el vehículo del concejal José Ignacio Iruretagoyena después de la explosión.

Ardanza: «La Ertzaintza no puede hacer milagros»

El *lehendakari* del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, defendió ayer la actuación de la Ertzaintza para garantizar la seguridad de los ciudadanos, en especial la de las personas que «más riesgos corren», aunque matizó que «no puede hacer milagros».

Para Ardanza, «la Ertzaintza, en todo momento, trata de proteger a las personas y a sus bienes porque es su responsabilidad». Así, reiteró que el esfuerzo y el compromiso de la policía autonómica es «total y absoluto».

[También Juan María Atutxa, consejero de Interior del Gobierno vasco, salió ayer al paso de la críticas contra la Ertzaintza, de las que dijo que «no tienen sentido». Agregó que este cuerpo «está a la misma altura que cualquier otra policía».]

Sobre las posibles medidas que se podrían tomar, Ardanza dijo que «el peor favor a cualquier medida que se pueda tomar es hacerla pública y no estoy dispuesto a pasar un comunicado a ETA de lo que vamos a hacer». «Sólo pasaremos ese comunicado a afectados e interesados», añadió.

El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, señaló ayer que el problema del terrorismo en el País vasco «no se va a solucionar únicamente con más policías» para los concejales.

Agregó que Atutxa «está haciendo todo lo que puede para garantizar la seguridad». Dijo que el Gobierno vasco puede poner «protección a todos los ediles del PP, pero ETA puede decidir que el próximo objetivo sean las secretarias, por ejemplo, o los conductores, ya que están locos».

Fraga pide que intervenga el Gobierno

Se ampara en la Constitución para que se sustituya a la Ertzaintza

MADRID.— El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, apuntó ayer la posibilidad de una intervención directa del Gobierno central para garantizar la seguridad en el País Vasco de los concejales del Partido Popular.

La propuesta del presidente gallego supondría que miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, tales como Guardia Civil o Policía Nacional, pasasen a proteger a los concejales *populares* en el País Vasco, en vez de hacerlo la Ertzaintza como hasta ahora.

Dicha medida se llevaría a cabo previa aprobación del Senado; una posibilidad abierta, dado que el Partido Popular goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Fraga, que planteó dicha propuesta durante su intervención en *El primer café* de Antena 3 tras conocerse el asesinato del concejal del PP en Zarautz José Ignacio Iruretagoyena a manos de ETA, defendió su propuesta indicando que ésa es una eventualidad que está recogida en la Carta Magna.

«Cuando un Gobierno autonómico no puede cumplir todas sus funciones, está prevista la posible intervención del Gobierno nacional, previo dictamen favorable del Senado. Ese es el último remedio, pero hay que saber que está en la Constitución», explicó el presidente gallego.

Fraga hacía referencia así al artículo 155 de la Constitución de 1978, que dice textualmente: «Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá aprobar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

El punto dos de este mismo artículo constitucional añade que: «Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas».

Fraga, que lamentó profundamente el asesinato del concejal José Ignacio Iruretagoyena, criticó la actual situación de orden público. En este sentido, defendió que se mejore «si se quiere mantener el equilibrio político previsto por la Constitución, por el Estatuto y por los principios básicos democráticos». «Hay que hacer algo porque esto así no puede seguir», apuntó el presidente gallego, visiblemente afectado.

Fraga también se refirió a los continuos atentados contra el orden público que han tenido lugar recientemente en el País Vasco. «El hecho de que la sucesión de actos vandálicos en el País Vasco en los primeros días del año no haya provocado detenciones, indica que algo falla», criticó Fraga.

El mandatario gallego expresó asimismo su indignación ante la indefensión que sufren algunos miembros del PP en el País Vasco y señaló que «es evidente que éste es un problema de Estado».

«Cuando se plantea una situación indefinida de inseguridad para un grupo social importante, representativo y políticamente creciente, hay que buscar una solución», apuntó Fraga.

A su juicio, «hay que hacer algo porque lo que es evidente es que así no se puede seguir. Mayor Oreja y Atutxa se tienen que reunir inmediatamente y buscar una solución, porque hay base legal para ello», recalcó el presidente de Galicia.